

Resistencia civil en el altiplano boliviano contra el extractivismo minero transnacional: tres estudios de caso (1980-2020)

Civil resistance in the Bolivian highlands against transnational mining extractivism: three case studies (1980-2020)

María Francesca Rodríguez Vargas¹

Recibido: 17 de julio de 2023. Aceptado: 17 de noviembre de 2023.

Received: July 17, 2023. Approved: November 17, 2023.

RESUMEN

Este artículo analiza campañas de resistencia civil en el altiplano boliviano en las cuales la sociedad civil se ha posicionado en contra de proyectos mineros o gestiones relacionadas con ellos. La metodología utilizada es el estudio de casos mediante la revisión documental, por lo cual se han escogido tres campañas de resistencia civil representativas de la conflictividad socioambiental y relativas a proyectos extractivistas mineros posteriores a 1980: la explotación del Cerro Achachucani, Salar de Uyuni y Mina San Cristóbal. Los resultados muestran el rechazo a la minería transnacional, que ha propiciado campañas protagonizadas por actores heterogéneos de la sociedad civil que han ejecutado acciones no violentas como estrategia. En definitiva, este estudio se propone como un aporte al debate académico y político en torno a la gestión de conflictos, justicia ambiental y gobernanza.

Palabras clave: Resistencia civil, no violencia, extractivismo, conflicto socioambiental

ABSTRACT

This article examines civil resistance campaigns in the Bolivian highlands, where civil society has opposed mining projects or their management. The methodology employed involves a case study approach through documentary review. Three noteworthy civil resistance campaigns, associated with socio-environmental conflicts and extractive mining projects post-1980, have been chosen for analysis: the exploitation of Mount Achachucani, Uyuni Salt Flat, and San Cristóbal Mine. The findings reveal a widespread disapproval of transnational mining, prompting diverse actors from civil society to initiate nonviolent actions as a strategic response. In essence, this study aims to contribute to both academic and political discourse on conflict management, environmental justice, and governance.

Keywords: Civil resistance, nonviolence, extractivism, socio-environmental conflict.

¹ Chilena, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada. Granada, España, mfrodvar@gmail.com. Este artículo se realizó en el marco de la beca de doctorado ANID folio N.º 72220038.

Introducción

En este estudio se analizan tres campañas de resistencia civil en el altiplano boliviano asociadas al extractivismo minero, a saber, relacionadas con la explotación de oro en el Cerro Achachucani, de litio en el Salar de Uyuni y de zinc, plomo y plata en la Mina San Cristóbal. Los conflictos socioambientales en el marco de estas campañas se han iniciado en distintos momentos a partir de fines de la década de 1980, evidenciándose reactivaciones hasta iniciada la década de 2020. En tanto, el propósito de esta investigación es contribuir al estudio de la resistencia civil en Bolivia, aportando al debate académico y político en torno a la gestión de conflictos, justicia ambiental y gobernanza, y a su vez, dilucidar oportunidades de construcción de paz en un complejo escenario sociopolítico, económico y ambiental.

En principio, este estudio surge ante la necesidad de contribuir a la construcción de conocimiento científico a partir del vacío teórico que se refleja en la inexistencia de artículos científicos sobre casos de resistencia civil en Bolivia, por lo cual, este estudio se presenta como pionero en el área desde una perspectiva de investigación para la paz. En efecto, este estudio ahonda en las tácticas o métodos de acción colectiva no violenta y factores que inciden en el éxito o fracaso de la resistencia civil, contribuyendo al desarrollo de enfoques más efectivos para la construcción de paz a través de la acción de la sociedad civil.

Particularmente, esta investigación se centra en la actividad extractiva de la minería en consideración de la relevancia de esta actividad para Bolivia y especialmente para el altiplano boliviano. Actualmente las exportaciones de Bolivia se concentran en la minería, hidrocarburos y productos derivados de la soya (Organización Internacional del Trabajo, 2022). De hecho, para el Banco Central de Bolivia la minería se considera un sector que determinaría el curso del crecimiento boliviano los próximos años en consideración de una positiva tasa de crecimiento para el sector, especialmente en el periodo 2006-2018 con un 7,1%, aunque con algunos años de contracción en sintonía con las variaciones internacionales de los precios de minerales (Calle y Bustos, 2019).

La investigación se ha delimitado al altiplano donde el rubro minero cobra aún mayor importancia: Potosí es el primer departamento que genera mayores ganancias producto de la minería, lo cual asciende a 2.831 millones de dólares por venta de minerales anuales, especialmente zinc, plata y plomo, siguiéndole La Paz con 2.776 millones de dólares, siendo el oro el principal mineral de exportación; de hecho, a nivel nacional el oro es el mineral más exportado y en sintonía con ello, el escenario de la explotación aurífera se aborda en este estudio con el caso orureño de Cerro Achachucani. Asimismo, en relación con los datos aportados, la producción de zinc, plomo y plata se incrementó notoriamente a partir de 2008, siendo uno de los proyectos cruciales San Cristóbal, también parte de este estudio (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2023).

Por su parte, desde el 2008 el “Proyecto de Industrialización del Litio” es clave para el devenir del país andino. Bolivia cuenta con recursos minerales estratégicos demandados a nivel nacional e internacional como el litio, presentándose un escenario actual de incertidumbre respecto de las tecnologías que se utilizarán a futuro para la explotación en miras a un viraje

hacia la Extracción Directa de Litio (EDL) que generaría residuos de alta toxicidad, como una de sus desventajas (Mondaca, 6 de mayo de 2022), sin embargo, el debate se mantiene en torno a la explotación y aún no es posible evidenciar la consolidación de las siguientes fases del proyecto.

Dos de los casos mencionados revisten gran relevancia para el rubro minero en Bolivia y se sitúan en el departamento de Potosí, donde a pesar de su actividad y aporte económico al país, según los últimos datos oficiales disponibles tiene la mayor incidencia de pobreza de Bolivia (Instituto Nacional de Estadística, 2018). El tercer caso relativo a la explotación del Cerro Achachucani, se lleva a cabo en el departamento de Oruro, que representa un caso de éxito al lograr la protección legal del territorio frente a la minería, reivindicando el territorio como agrícola, ganadero y lechero, obteniéndose en 1994 el título de Challapata como “Capital agrícola, ganadera y comercial del Departamento de Oruro”, seguido de otras declaratorias que eximen la dependencia del territorio al extractivismo minero.

En este contexto, es que se ha planteado el supuesto de que el uso de la resistencia civil como estrategia es capaz de lograr alcances significativos para la construcción de paz en escenarios de conflictividad socioambiental. En efecto, el objetivo principal de esta investigación es analizar tres campañas de resistencia civil en el altiplano boliviano asociadas al extractivismo minero, con los objetivos específicos de examinar la relación de la sociedad civil con la minería a partir de estos casos, caracterizar a los actores involucrados en las campañas de resistencia civil así como las acciones no violentas desplegadas, a fin de contrastar las demandas de las campañas y alcances de la utilización de la resistencia civil y el consecuente uso de métodos no violentos para el logro de objetivos.

Finalmente, y en relación con la estructura de este artículo, posterior a este apartado introductorio, se presenta el marco teórico en donde se define qué es lo que entiende este estudio por extractivismo, conflicto socioambiental y resistencia civil, y seguidamente, se presentan antecedentes relativos a la relación de Bolivia con la minería y el extractivismo. Posterior a ello, se expone la metodología utilizada y la contextualización de los casos escogidos, para continuar con los resultados y conclusiones del estudio.

Marco teórico

Extractivismo, conflictividad socioambiental y resistencia civil

El marco teórico de esta investigación está definido por conceptos como extractivismo, conflicto socioambiental y resistencia civil, los cuales son conceptos ineludiblemente relacionados a los casos de estudio. Los tres casos analizados se encuentran vinculados al rubro extractivo minero, generándose conflictos socioambientales con grupos, organizaciones o comunidades que han utilizado la resistencia civil como estrategia para lograr objetivos.

En principio, el extractivismo es comprendido como la explotación a gran escala tanto de recursos no renovables como renovables que se “renuevan” más lento de lo que se explotan;

aquellos recursos salen al mercado internacional mediante exportaciones como materias primas o commodities, con nulo o bajo procesamiento (Gudynas, 2013; Gudynas 2021). Dentro de la categoría de extractivismo es posible considerar actividades extractivas tradicionales como la minería y extracción de hidrocarburos, pero también es posible incluir la agroganadería, el rubro forestal o la piscicultura (Svampa, 2012; Seoane, 2013).

Acosta y Brand (2017) y Gudynas (2021) plantean cómo el extractivismo ha mutado hacia el neoextractivismo en América Latina y es así como en países como Bolivia se promueve abiertamente el extractivismo desde la bancada política progresista del Movimiento al Socialismo (MAS), entramándose discursos que representan el extractivismo como una solución a la pobreza a través de los beneficios económicos obtenidos de las actividades extractivas.

De esta manera, en el marco del extractivismo surgen conflictos socioambientales, desplegándose discursos en ocasiones inconmensurables en torno al extractivismo, la minería y el desarrollo, así como surgen problemáticas ligadas a la afectación real o potencial de la vida y formas de vida de las personas y otras especies. Se considera que el concepto de “conflicto ambiental” omite aquel componente discursivo y el carácter social de los conflictos y los impactos del extractivismo, que no solo pueden ser ambientales sino relativos al ámbito social, incluyendo cultural y económico. Por ello, en esta investigación se privilegia el uso del concepto “conflicto socioambiental”, ya que, como bien se ha mencionado, en este tipo de conflictos se evidencian variables e impactos tanto asociadas a condiciones ambientales como sociales, especialmente relacionadas con la calidad de vida de las personas en los territorios (Santandreu y Gudynas, 1998).

Por su parte, en los conflictos se evidencian diversas posiciones y estrategias utilizadas por los actores involucrados y en el caso de los conflictos socioambientales, quienes se oponen a proyectos extractivistas o gestiones relacionadas con ellos, suelen utilizar vías institucionales o extrainstitucionales para lograr sus objetivos. Una de las vías extrainstitucionales es el uso de la no violencia materializada en campañas de resistencia civil, como procesos en los cuales se utilizan métodos no violentos de resistencia de manera sostenida, buscándose la transformación del conflicto por vías no violentas a pesar de que la contraparte utilice abiertamente la violencia (Randle, 1994; Schock, 2013). Por su parte, en las campañas de resistencia civil se pueden desplegar una amplia gama de métodos no violentos como la protesta y persuasión, la no-cooperación, la intervención no violenta (Sharp, 1973) y la intervención creativa constructiva (Bartkowski, 13 de junio de 2018), o actos de expresión, omisión o comisión según la clasificación de Beer (2021).

Por último, la relación del país andino con la minería, la relevancia del rubro y los discursos circundantes en torno a ella, guardan estrecha vinculación con la historia del país que queda reflejada en las dimensiones que adquieren los conflictos y campañas de resistencia civil que se han estudiado. En efecto, en el siguiente apartado se describe brevemente la historia de la minería boliviana que ha consolidado el extractivismo contemporáneo.

Bolivia, minería y extractivismo

En lo contemporáneo, la importancia del extractivismo en el desarrollo económico y social boliviano, así como los discursos que se han construido, obedecen a su historia, la cual se aborda en este apartado a fin de contextualizar y poner en perspectiva los resultados posteriormente expuestos:

En principio, en el periodo prehispánico se asume que se desarrolló la minería en territorio boliviano a partir de narrativas orales y escritas (Perrault, 2014), aunque Salazar y Vilches (2014) indican que hay escasez de estudios arqueológicos que corroboren dónde se realizaban las explotaciones, lo cual, por una parte, obedecería a que los yacimientos mineros explotados previo a la invasión española fueron alterados con posterioridad borrando huellas prehispánicas; y por otro lado, se ha comprobado que los sitios que se han señalado como sitios de explotación minera prehispánica no habían sido utilizados antes de los españoles.

En la época colonial ha sido bien estudiada la minería en Bolivia, dada la importancia para la economía de la corona española (Salazar y Vilches, 2014), especialmente del yacimiento argentífero del Cerro Rico de Potosí (Serrano, 2004). Entre 1581 y 1600 solo de Potosí se extrajo más del 42% de la plata a nivel mundial y para el año 1788 ya se extraían 740 toneladas de minerales semanalmente, sin considerar las cifras de contrabando. Por su parte, la era del oro se ha situado entre 1544 y 1650, sin embargo, posteriormente fue en decadencia y no llegó al nivel de explotación de la plata. En la otra cara de la riqueza y opulencia, la explotación del Cerro Rico costó más de 8 millones de muertes de indígenas y población afroamericana (Perrault, 2014) por lo que Bolivia ha conocido el apogeo y la violencia en su relación con la minería.

En los siglos XIX y XX la minería como motor económico del país se hizo evidente (Perrault, 2014). Sin embargo, los yacimientos explotados y sobrexplotados desde la Colonia en muchos casos fueron abandonados ante la necesidad de mayor tecnología para alargar su producción. En un documento redactado por el irlandés John Barclay Pentland titulado “Informe sobre Bolivia 1826” se relata la situación de Bolivia en ese año, según se indica, un 73% de las exportaciones fueron de plata, un 22% de oro y en menor medida estaño, con un 2%, además de otras exportaciones residuales. La Compañía Huanchaca fue la más importante durante el siglo XIX, representando el 50% de la producción nacional de plata, sin embargo, el precio de la plata decayó y la producción de la compañía se detuvo en 1890, lo cual junto con el cierre de minas en el territorio llevó al fin del ciclo de la plata (Espinoza, 2010).

Un conflicto bélico relevante en la historia minera y económica de Bolivia es la Guerra del Pacífico (1879-1880) o Guerra del Guano y del Salitre en contra de Chile y con Perú como aliado boliviano. Según se ha indicado, la causa directa del conflicto fue el anuncio del gobierno boliviano del cobro de impuestos de 10 centavos por quintal de salitre a la poderosa Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, que llevó a los empresarios a pedir intervención de Chile en un conflicto en escalada y que ocasionó la pérdida de aproximadamente 120.000 km² bolivianos y su costa marina de 400 kilómetros, con el evidente apoyo inglés a Chile como una de las causas de la derrota boliviana y el avasallador triunfo chileno (Sansoni, 1997). La pérdida de territorio significó la pérdida de yacimientos de salitre, plata y cobre que recién tomaron

relevancia en el siglo XX. En tanto, en Bolivia se inicia el ciclo del estaño: un 74,8% de las exportaciones bolivianas en la década de 1930 fue de estaño, empero, dicho ciclo culmina en 1985 al momento de una fuerte crisis económica (Espinoza, 2010; Restrepo, 2015).

Similar al devenir de otros países latinoamericanos, fue durante la década de 1990 que se profundizaron políticas neoliberales con fines extractivistas para la atracción de inversiones extranjeras a Bolivia, especialmente en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Para Restrepo (2015) los procesos de descentralización del país buscaron debilitar organizaciones sociales de carácter nacional, paralelos a procesos de abierta privatización de la economía. De hecho, el periodo comprendido entre 1993-1998 se concibe como la época de oro del neoliberalismo en Bolivia en tanto se reconstruyó el modelo de acumulación y aparente armonía con el beneplácito de ideólogos liberales, indigenistas y una renovada izquierda reformista. Por su parte, el mecanismo que ha permitido a operadores mineros controlar los recursos hídricos es la legislación sectorial del Código de Minería Ley N.º 1777, vigente desde 1997: las aguas de ríos, vertientes, subterráneas y todas las demás son públicas porque son de dominio originario del Estado, sin embargo, el Código de Minería permite derechos irrestrictos de uso, sin cargos económicos (Perrault, 2014).

En la primera década del siglo XXI, es menester mencionar que el extractivismo minero se ha visto acompañado de la explotación de hidrocarburos, por lo que se afirma que en la década del 2000 al menos el 55% del territorio boliviano se encontraba destinado a la producción de hidrocarburos (Bebbington, 2009). La escena extractiva en general y particularmente minera actual del país es compleja, ya que involucra diversos actores y relaciones de acuerdo y conflicto, a saber, participan el Estado, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), actores privados, cooperativas, etcétera. Sin embargo, en las últimas décadas, a pesar de la relevancia de la minería en el país, las inversiones extranjeras han sido menores que las de países vecinos y los megaproyectos escasean, convirtiéndose en una esperanza el controlar los recursos a nivel nacional y superar la pobreza, como una expresión del neoextractivismo.

Metodología

Esta investigación es cualitativa ya que busca analizar tres campañas de resistencia civil en el altiplano boliviano asociadas al extractivismo minero, en el marco de la conflictividad socioambiental en el territorio desde la segunda parte de la década de 1980, para lo cual se ha utilizado la metodología del estudio de casos. Para el estudio de casos, se ha desarrollado una investigación documental que ha consistido en la revisión y análisis de artículos científicos, periodísticos, informes, documentos jurídicos e información documental compartida por organizaciones sociales del territorio. Los datos obtenidos se han analizado en función de crear categorías que describan los casos de estudio como procesos de resistencia civil determinados por discursos, actores y métodos utilizados en dichos procesos.

Los tres casos de estudio se han escogido a partir de una base de datos de campañas de resistencia civil en zonas andinas y preandinas de Bolivia y otros países al sur de los Andes en el marco de la conflictividad socioambiental, la cual ha sido construida y analizada por Rodríguez y

Checa (2022). De estos casos, 33 correspondían a Bolivia y en efecto, se han escogido tres casos de relevancia en el territorio: el rechazo a la minería en el Cerro Achachucani y la defensa de la Represa Tacagua como representación explícita de la defensa del agua, la minería de litio en el Salar de Uyuni como conflicto de interés ante la demanda mundial de litio, y, por último, el proyecto minero San Cristóbal, uno de los pocos proyectos transnacionales en el territorio boliviano.

La elección de estos tres casos radica en sus características heterogéneas. Pues, estos casos presentan características diversas en cuanto a actores y objetivos, y al iniciarse y reactivarse en distintos periodos a partir de finales de la década de 1980. Los primeros registros de conflictividad son en relación con el litio en el Salar de Uyuni cuando en 1987 el presidente Víctor Paz invitó a la empresa estadounidense LITHCO a explotar el salar. Posteriormente, en 1993 con la llegada del consorcio boliviano-canadiense EMUSA-Orvana se hace evidente el conflicto por la explotación del cerro Achachucani, así como en la década del 2000 ya se hacen evidentes relaciones conflictuales con el proyecto San Cristóbal a propósito del desplazamiento de todo un poblado. Asimismo, se presentan diversos niveles de intensidad en línea temporal, dos de los casos se califican como abiertos y uno de los casos (Cerro Achachucani) es posible categorizarlo como un caso cerrado y exitoso, lo cual, no exime de futuras reactivaciones del conflicto.

Casos de estudio

Explotación del Cerro Achachucani y protección de la Represa Tacagua

Desde finales de la década de 1950 la Represa Tacagua (4.357 ha.) se encuentra en funcionamiento en el Departamento de Oruro y Provincia de Abaroa en la zona altiplánica de Bolivia, cercana al municipio de Challapata y a escasos kilómetros del Lago Poopó, segundo lago de mayor superficie en el país. Fue construida en el gobierno de Víctor Paz, financiada por el gobierno mexicano y es uno de los dos sistemas de riego públicos junto con La Angostura en el Valle de Cochabamba (5.500 ha.). La represa es abastecida del Lago Poopó, Río Crucero, Berenguela y Huaracani (Herrera, 2005) y tiene una capacidad de almacenamiento de 45 millones de m³ de agua por año y una capacidad de riego de más de 10.000 ha., aunque por la sedimentación actualmente funcionaría a la mitad de su capacidad (Mercado, 2021).

En 1995 se creó la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego N°2 Tacagua (AUS-NART) que considera a 1.200 familias de 43 a 44 comunidades dentro del cantón Challapata. Por lo cual, es posible identificar un antes y un después de la existencia de la represa, ya que anteriormente las familias cultivaban para autoconsumo, pero posteriormente se comienza a desarrollar el sector agropecuario como soporte de las economías familiares de la zona, transformándose en reconocidas productoras de haba y papa, alfalfa, trigo, cebada, quinoa y hortalizas, pero también de cultivo de forrajes y crianza de ganado para carga y para la producción de leche, además de la crianza de porcinos y aves de corral (Madrid et al., 2002, Mercado, 2021).

El Cerro Achachucani es un yacimiento de oro que contaba con 13 concesiones contiguas que abarcaban alrededor de 78 kilómetros cuadrados (Colectivo CASA, 2013), se encuentra a medio

kilómetro de la represa y con la llegada del consorcio boliviano-canadiense EMUSA-Orvana en 1993 emerge el temor en la población civil ante la inminente contaminación de la represa y los cultivos, pérdidas de animales y expropiaciones, y con ello, surge la resistencia. Anteriormente las operaciones eran llevadas a cabo por el concesionario Luis Garabito, con labores extractivas bajas. Sin embargo, a mediados de 1993, el consorcio vendió sus derechos sobre el cerro (Madrid et al., 2002). El 2007 y hasta 2011 la empresa canadiense Castillian Resources Bolivia S.A. declaró terminar la exploración en el cerro para iniciar prospecciones, pero frente a esto, las y los comunarios se organizaron nuevamente impidiendo la llegada de proyectos mineros transnacionales (Colectivo CASA, 2013; Mercado, 2021).

Minería de litio en el Salar de Uyuni

El municipio de Uyuni es parte de la provincia de Antonio Quijano en el departamento de Potosí, en el territorio se emplaza el codiciado Salar de Uyuni a 3.670 msnm, con una extensa superficie de 10.582 m². Las actividades económicas de la zona son la agricultura de quinua y papa, además del pastoreo de llamas y ovinos; sin embargo, también hay parte de la población que ha migrado hacia otros territorios en los cuales hay disponibilidad de trabajos estacionarios (Ströbele-Gregor, 2013; Colectivo CASA, 2013). La minería de litio ha ganado terreno progresivamente desde la década de 1980 (Iño Daza, 2018) y ha llevado a la planificación del gran proyecto de “industrialización del litio” impulsado por el expresidente Evo Morales.

Inevitablemente, las demandas del mercado internacional condicionan el territorio, no solo por la demanda del litio, sino también con el aumento de producción de quinua (Colectivo CASA, 2013) y minería de plata a gran escala. En lo que respecta al litio, en medio de la ola privatizadora del mandato de Jaime Paz Zamora (1989-1993), se ofreció por 40 años la explotación del salar a la empresa FMC Lithium Corp., lo que generó una fuerte resistencia local que sepultó el proyecto y llevó a la empresa a abandonarlo (Fornillo, 2018), pero a inicios del siglo XXI, la demanda se ha intensificado a propósito de la propaganda sobre los beneficios de las baterías de litio en cuanto a coste/vida útil en aparatos electrónicos como alternativa “verde” a los hidrocarburos (Ströbele-Gregor, 2013). Esta demanda internacional y las elevadas cantidades de recursos de litio han llevado al desarrollo de un plan nacional en torno al litio como posibilidad de “salir de la pobreza”, la llamada “industrialización del litio” (Iño Daza, 2018).

El proyecto anunciado el 2008 en el programa del expresidente Evo Morales, está dividido en tres fases: (1) Producción piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio con tecnología 100% boliviana (2012-2015) (2) producción industrial de ambos elementos (2016-2017), en 2018 se inauguró una planta de procesamiento de cloruro de potasio y hasta ese momento se preveía que el 2019 iniciara la producción de la planta de carbonato de litio y (3) fabricación de materiales de cátodo, electrolitos y baterías de ion de litio en colaboración con socios internacionales, esta etapa estaría en desarrollo para su concreción ya que se proyectaba que desde 2024 comenzara la producción masiva de baterías.

Proyecto minero San Cristóbal

A escasos kilómetros del Salar de Uyuni y a 3.900 msnm se encuentra el proyecto minero Mina San Cristóbal de la empresa japonesa Sumitomo Corporation (anteriormente pertenecía a Apex Silver), el proyecto se emplaza en Colcha K en la provincia Nor Lipez en Potosí y consiste en una mina a cielo abierto de la que se obtiene plata, plomo y zinc, minerales que son procesados para la producción de concentrados (López, 2009). Cabe mencionar que la mina en cuestión es la tercera mayor mina productora de concentrado de plata y zinc a nivel mundial (Jiménez, 2019), en contraste con las actividades habituales de los comunarios de San Cristóbal basadas en la actividad agropecuaria, con la siembra de tubérculos y quinua, y la ganadería de camélidos (López, 2009).

En sintonía con las fluctuaciones del mercado, una mejora en el precio de la plata y el aumento de la demanda de materias primas llevó en la segunda parte de la década de 1990 al inicio de operaciones en los alrededores del pueblo San Cristóbal por la norteamericana Apex Silver. En 1998 se firmó un acuerdo para trasladar el pueblo con el mismo nombre para exploraciones y consiguientemente se inició la construcción de infraestructura, lo cual tardó ocho años para iniciar operaciones, hasta que el 2009 la capacidad productiva llegó a su 100% (Jiménez, 2019). El año 2000 fue aprobado el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) presentado por Apex Silver, pero según López (2009) la evaluación ambiental del proyecto no contó con estudios hidrogeológicos y no ha habido procesos de consulta, sino que solo ha habido negociación ente privados y procesos informativos unidireccionales desde la empresa hacia la comunidad.

Asimismo, han existido denuncias de comunidades por derrames de relaves, incremento de polvo y el uso del agua. Especialmente las comunidades han comenzado a alertarse por el uso de agua, pues, hace una década ya se denunciaba que se extraerían hasta 50.000 metros cúbicos de aguas subterráneas diariamente, lo cual se ha denunciado por comunidades y organizaciones como la Federación Regional Única de Trabajadores y Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) (Colectivo CASA, 2013). En términos concretos, se ha evidenciado la pérdida de ojos de agua en zonas aledañas a la mina (López, 2009). Y, en concordancia con ello, hace una década ya se consideraba la mina San Cristóbal como la mayor fuente de contaminación y daño ecológico en la región (Hollender y Schultz, 2010). En contraste, a pesar de los evidentes problemas ambientales y el traslado de población, hay quienes defienden el proyecto en vista a los beneficios sociales y económicos como el empleo.

Resultados

A continuación, se desglosan las categorías de análisis construidas a partir de los datos documentales recopilados. En primer lugar, se hace alusión a los discursos identificados en torno a la minería en los tres casos, para seguidamente abordar actores involucrados en los conflictos, acciones no violentas de resistencia, así como demandas y alcances del uso de las mencionadas acciones.

Bolivia y minería: una relación conflictiva

La minería forma parte de la historia boliviana y también de su identidad. En este apartado, a partir de la revisión de los tres casos de estudio, se hace alusión a los discursos identificados en torno a la minería. En el caso de la oposición a la minería en el Cerro Achachucani por la protección de la Represa Tacagua se manifiesta un discurso que niega que Bolivia sea un país esencialmente minero, mientras que en los casos de la extracción de litio en el Salar de Uyuni y la Mina San Cristóbal, el discurso de base es el rechazo al imperialismo y a la minería transnacional.

Si debiese llevarse a cabo minería o no y en qué términos es una disyuntiva ampliamente identificada. En el caso del Cerro Achachucani, es preciso reconocer la minería como fuente de conflicto aún entre comunarios de distintos territorios aledaños. En efecto, se ha planteado una distinción entre habitantes de las tierras altas que valoran positivamente la minería, mientras que los habitantes de las tierras bajas no, en conciencia de los catastróficos efectos socioambientales que saben acarrear los proyectos mineros (Mercado, 2021). Las y los habitantes de Challapata (municipio del conflicto) han enfatizado en que, por encima de la minería, el sector agropecuario es el que caracteriza la zona, por lo que mediante la vía legal buscaron declarar Challapata como capital agrícola, ganadera y comercial de Oruro, y lo lograron (Madrid, et al., 2002), así como se han logrado implementar otras figuras legales que resaltan las actividades tradicionales de la zona.

Este particular caso de resistencia, ha utilizado como lema no solo el rechazo a la minería en el Cerro Achachucani y la defensa de la Represa Tacagua, sino que también se identifica un vuelco al discurso hegemónico de que Bolivia es exclusivamente minera, y en efecto, se ofrecen otras posibilidades de existencia y desarrollo: Bolivia también es agrícola, ganadera, lechera, comercial y no solo minera.

Por otro lado, en los casos de la minería de litio en Uyuni y la Mina San Cristóbal, no se evidencia un rechazo hacia la minería propiamente tal, de hecho, se reconocen como territorios mineros. Más bien, se evidencia un rechazo al imperialismo y a la minería transnacional que reproduce historias de violencia del pasado, de acaparamiento y despojo, como en el Cerro Rico de Potosí. En el caso del litio, el discurso que atraviesa las organizaciones y movilizaciones sociales del territorio se enmarca en la búsqueda de que los recursos ahí extraídos traigan beneficios económicos al territorio mismo del cual se extraen y no a empresas extranjeras, en concordancia con la esencia del proyecto de industrialización del litio iniciado por el expresidente Evo Morales. Por tanto, los principales hitos del conflicto guardan relación con la suscripción de contratos con empresas extranjeras:

El Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) en 1990 puso objeciones al contrato suscrito entre el Ministerio de Minería y Metalurgia y Lithium Corporation of America, haciendo alusión a la defensa de los recursos del salar en plena memoria histórica del extractivismo voraz que ha sufrido el territorio. Las conclusiones de dichas objeciones indican que el mencionado contrato sería anticonstitucional, ilegal y lesivo a la soberanía e intereses nacionales. Asimismo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) indicaba que el procesamiento del litio en plantas estadounidenses no beneficiaría en absoluto a Bolivia, pues en el país del norte

se generaría el valor agregado de la materia prima (Iño Daza, 2018). Actualmente, si bien el litio es manejado por el Estado, este se asoció con la empresa alemana K-Utec Technology para el diseño de una planta en el salar (OLCA, OCMAL y Resumen, 12 de enero de 2021) lo cual generó protestas, al igual que los vínculos con ACI Systems Alemania, que empujaron a la anulación del decreto de una sociedad industrial mixta el 2019.

Por su parte, en el caso de la Mina San Cristóbal, se repite un discurso similar de rechazo a la minería extranjera en este caso, pues, el proyecto corresponde a capitales japoneses. Aunque cuando se ha intensificado el conflicto, las demandas específicas no han apuntado exclusivamente a ese punto, sino que guardan relación con el incumplimiento de promesas de la empresa y particularmente, la defensa de una gestión del agua responsable (ABI, 16 de abril de 2010; Hollender y Schultz, 2010).

Por último, en un marco global de extractivismo colonial, Bolivia se constituye como un espacio de resistencia que cuestiona y renuncia a dichas lógicas imperialistas en el sistema internacional, reivindicando otros rubros tradicionales en uno de los casos, y con distintos grados de intensidad, rechazando el desarrollo del extractivismo en modo de minería transnacional en los territorios, es decir, rechazando que el país y los territorios en específico como Potosí no reciban beneficios económicos “justos” y que el valor agregado de la materia prima exportada se genere por fuera del territorio.

Actores e interrelaciones en los conflictos

En este apartado se abordan los actores en los conflictos y sus interrelaciones, partiendo por describir la existencia o inexistencia de mecanismos de comunicación e información sobre los proyectos mineros, incluyendo los procesos de consulta indígena como una primera forma de acercamiento oficial por parte del Estado y privados con las comunidades, consagrada en la constitución boliviana; para continuar desglosando cuáles son los actores involucrados en cada uno de los conflictos.

Ha sido imposible acceder a documentación oficial sobre los casos abordados, Villalobos (2 de julio de 2019) indica que los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) no son públicos, lo cual limita el acceso a la información y, asimismo, tampoco existiría información relativa a la existencia de la consulta previa, libre e informada. FRUTCAS (s.f) asegura que el único lugar de acceso a documentos oficiales es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas en La Paz. Por su parte, Mendoza (1 de agosto de 2022) plantea que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía no socializan información, cuando precisamente por ser entes estatales deberían existir prácticas de transparencia. Por su parte, Liégeois (2012) ha indicado que el Ministerio de Medio Ambiente no realiza esfuerzos para que la Minera San Cristóbal proporcione datos completos sobre sus faenas, manifestando una relación económica y estratégica con el gobierno boliviano.

En los casos de la explotación del Cerro Achachucani, Salar de Uyuni y Mina San Cristóbal no se ha encontrado información relativa a una efectiva aplicación de la consulta indígena, consi-

derando que el Convenio OIT 169 fue asumido en 1991 por Bolivia, aunque no fue hasta el 2011 tras la VIII Marcha Indígena que recién el Estado mostró voluntad política para hacer valer dicho mecanismo, incluido en la Constitución de 2009 y en la Ley 535 de Minería y Metalurgia que incorpora la figura de la consulta dentro del trámite de Contrato Administrativo Minero (CAM), incluyendo no solo a pueblos indígenas, sino también campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas (Mercado, 2021).

Ströbele-Gregor (2013) asegura que, en el caso del Salar de Uyuni, las comunidades no fueron consultadas y no existe evidencia de que las comunidades estuviesen informadas de los procesos ocurridos en el territorio y de la realidad de los costes ambientales del programa del litio. Por su parte, en el 2021 diversas organizaciones en Challapata denunciaron que no se ha realizado consulta de buena fe (uno de los principios de la consulta), denunciando que los acercamientos estatales han sido mal intencionados y sesgados en beneficio del operador minero por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Los denunciantes incluyeron a la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N°2 Tacagua, Asociación de Regantes, Defensor del Pueblo y alcalde de Challapata.

En tanto, en estas complejas relaciones entre parte y contraparte, los actores involucrados no son homogéneos, sino que representan distintos niveles y formas de participación. Asimismo, la contraparte estatal se representa en distintas instituciones involucradas en los conflictos, lo cual se representa en la Tabla 1, donde se incluyen todos los actores mencionados al menos en una ocasión en las fuentes documentales. En consecuencia, es menester considerar que los posicionamientos e involucramientos de los actores pueden haber variado en el tiempo, especialmente en los conflictos que siguen vigentes.

Es importante destacar la participación de la Red de Mujeres en la Defensa de la Madre Tierra en Challapata (Stachyra, 10 de marzo de 2020; OCMAL, 21 de abril de 2021) como colectivo que incorpora manifiestamente la dimensión del género en el conflicto, quienes se han organizado, apoyándose mutuamente y liderando campañas de sensibilización, por ejemplo, sobre el uso del agua. Asimismo, hay que mencionar apoyo generalizado a la oposición a la minería de las comunidades de regantes, incluyendo organizaciones y comunidades de no regantes aledañas que también apoyan la causa (Madrid et al., 2002). Por otro lado, es importante indicar relaciones de conflictividad entre el Comité Cívico Potosinista y la Federación de Campesinos del Altiplano Sud, sin embargo, las fuentes documentales son insuficientes para aportar información precisa respecto de dicho conflicto relacionado con distintos enfoques en las demandas de las campañas en Potosí.

En definitiva, son múltiples los actores en cuestión y es posible indicar la defensa del Estado del rubro minero y anexiones a empresas extranjeras. En tanto, es posible identificar una defensa más consensuada en el caso de la Represa Tacagua, donde el principal grupo y líder de la resistencia ha sido la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N°2 Tacagua, mientras que al menos a nivel documental, el liderazgo en Potosí se sitúa entre el Comité Cívico Potosinista y la Federación de Campesinos del Altiplano Sud, con diferencias en sus demandas que requerirían de un análisis del conflicto a partir de fuentes orales.

Tabla 1. Actores involucrados en las campañas de estudio.

| Caso | Actores en resistencia | Actores de la oposición |
|--|--|--|
| Defensa Represa Tacagua | <ul style="list-style-type: none"> · Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N°2 Tacagua · Comunidades de Acapallu y Tolapujro Cepeda de la marka Challapata · Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra · Federación Única de Trabajadores Campesinos de Oruro · Defensoría del Pueblo de Oruro · Municipio de Challapata · Colectivo CASA · Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyu · Federación de Juntas Vecinales de Oruro | <ul style="list-style-type: none"> · EMUSA-Orvana · Castillian Resources · Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera |
| Minería de litio en el Salar de Uyuni | <ul style="list-style-type: none"> · Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud · Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud · Departamento Social del Consejo de Salud de Potosí · Observatorio Plurinacional de Salares Andinos · Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario · Centro de Derechos Humanos y Ambiente · Centro de Documentación e Información Bolivia · Comité Cívico Potosinista | <ul style="list-style-type: none"> · Corporación Minera de Bolivia · Yacimientos de Litio Bolivianos · Prefecto de Potosí Mario Virreira · Ministro de Minería José Pimental |
| Minera San Cristobal | <ul style="list-style-type: none"> · Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud · Comité Cívico Potosinista · Municipio de Colcha K · Centro de Estudios Superiores Universitarios de la UMSS · Fondo de Becas Verdes Globales de Estados Unidos · Comisión de Gestión Integral de Aguas de Bolivia · Coordinadora del Agua | <ul style="list-style-type: none"> · Minera San Cristóbal · Sumitomo Corporation · Ministerio de Medioambiente y Agua |

Elaboración propia a partir de la revisión documental.

La noviolencia y la violencia en disputa

El abordaje de las resistencias noviolentas es complejo, ya que, si bien en su mayoría las campañas de resistencia son pacíficas y que por ello se caracterizan como procesos de resistencia civil, a veces suelen coexistir con acciones aisladas que se podrían calificar como violentas. Por ello, en este caso, se comienza abordando brevemente la problemática coexistencia, para posteriormente sistematizar los heterogéneos métodos noviolentos de resistencia utilizados.

En dos casos, se han identificado acciones aisladas que podrían generar controversia como lo ocurrido el 14 de febrero de 1994 en Challapata, donde hay antecedentes que indican que se retuvo a representantes del gobierno en una reunión, lo cual se ha calificado como “secuestro”. Por otra parte, en el caso de la Mina San Cristóbal, el 2010 se registraron protestas en las cuales

las comunidades locales exigieron que la empresa tuviese consecuencias por usar excesivamente el agua y que se cumpliera con un proyecto de electrificación de la zona e instalación de antenas para la comunicación. En aquella ocasión fueron incendiadas oficinas en el Sudoeste de Potosí (ABI, 16 de abril de 2010; Hollender y Schultz, 2010). No obstante, estos registros son aislados en los procesos de resistencia en los cuales prima el uso de acciones no violentas.

En cuanto al uso de la no violencia, en el caso del rechazo a la minería en el Cerro Achachucani y protección de la Represa Tacagua (Tabla 2) se han identificado 11 tácticas no violentas según la clasificación de Beer (2021), la mayoría de ellas son tácticas de expresión, protesta y apelación, combinadas con acciones más confrontativas como actos de comisión e intervención creativa/acciones prefigurativas. En este caso no se identifican actos de omisión. Dentro de las acciones no clasificadas de movilización se destaca la utilización de campañas en las que se realizan talleres y ferias, así como alianzas estratégicas con otras campañas similares, por ejemplo, estableciendo alianzas con personas que han resistido al proyecto La Joya de Inti Raymi. Por otro lado, también se ha considerado la mantención de organizaciones territoriales ancestrales como acto de resistencia, ya que Beer (2021) solo incorpora la creación de nuevas formas de organización social.

Tabla 2. Acciones no violentas en rechazo a la minería en Cerro Achachucani

| Categoría | Táctica |
|--|--|
| Expresión, protesta y apelación (Cómo uno dice algo) | <ul style="list-style-type: none"> · Asambleas de protesta u apoyo (47)² · Piquete en municipio (16) · Marchas (38) · Desfiles (39) · Cartas de oposición o apoyo (2) · Declaraciones públicas (4) · Lemas, caricaturas y símbolos (7): "Producción sin contaminación", "Lechería sí, minería no", "Agua para la vida, no para la mina", "El agua vale más que el oro", "Challapata sinónimo de soberanía alimentaria", "50 años de producción sin contaminación" · Diputaciones (13) |
| Actos de comisión (Cómo uno hace algo) | <ul style="list-style-type: none"> · Obstrucción no violenta (172) Bloqueos de caminos y líneas férreas hacia Argentina y Chile |
| Intervención creativa/acciones prefigurativas (Cómo uno hace o crea algo) | <ul style="list-style-type: none"> · Invasión no violenta (170) · Ocupación no violenta (173) (proyecto Pederson) |
| Otros | <ul style="list-style-type: none"> · Campañas · Alianzas estratégicas · Mantención de organizaciones territoriales ancestrales |

Elaboración propia a partir de la revisión documental.

2 Entre paréntesis se identifica el símbolo de la táctica de Beer (2021) en la clasificación de Sharp (1973).

Seguidamente, en la Tabla 3 se presentan las acciones identificadas en el caso del Salar de Uyuni, en este caso se evidenció menor volumen de información documental y se ha identificado un discurso que indica que la organización en el territorio es incipiente. Según la clasificación de Beer (2021), se ha identificado el uso de 7 métodos, que incluyen actos de expresión, protesta y apelación, actos de omisión y, por último, actos de comisión. En este caso no se identifican actos de intervención creativa/acciones prefigurativas. Por otro lado, una táctica que no se logró clasificar fue la redacción de una propuesta de ley de litio. Y, por último, hay que destacar que estratégicamente varias de las acciones se desarrollaron en La Paz con la intención de generar mayor presión.

Tabla 3. Acciones no violentas en rechazo a la minería en el Salar de Uyuni

| Categoría | Táctica |
|--|---|
| Expresión, protesta y apelación (Cómo uno dice algo) | <ul style="list-style-type: none"> · Marcha cívica (demandando rechazo del contrato con la LITHCO, 1990) (38) · Asambleas de protesta u apoyo (47) · Lemas, caricaturas y símbolos (7): Proclamación de Potosí como la “capital de la Dignidad Nacional” · Video digital de formato corto |
| Actos de comisión (Cómo uno hace algo) | <ul style="list-style-type: none"> · Huelga general (117) · Boicot de comerciantes (81) |
| Intervención creativa/acciones prefigurativas (Cómo uno hace o crea algo) | <ul style="list-style-type: none"> · Huelga de hambre (159b) |
| Otros | <ul style="list-style-type: none"> · Campesinos del Salar de Uyuni presentaron su propuesta de ley de litio en Bolivia. Entregaron a Asamblea Legislativa su anteproyecto de ley marco de litio y recursos evaporíticos (Buen vivir y ganancias para el Estado) |

Elaboración propia a partir de la revisión documental.

Por último, en el caso de la Mina San Cristóbal, el volumen de información es aún inferior, considerándose dos métodos de resistencia categorizados en expresión, protesta y apelación, e intervención creativa y acciones prefigurativas como acciones de baja/alta intensidad combinadas. Asimismo, aunque se incorpora una tercera táctica, no se considera en la clasificación de Beer (2021) como las amenazas de llevar a cabo acciones perjudiciales para la contraparte como en este caso, las amenazas de volcar contenedores de mineral.

Tabla 4. Acciones no violentas en rechazo a la minería en la Mina San Cristóbal

| Categoría | Táctica |
|--|---|
| Expresión, protesta y apelación (Cómo uno dice algo) | · Declaraciones públicas (4) |
| Intervención creativa/acciones prefigurativas (Cómo uno hace o crea algo) | · Obstrucción no violenta (172): Bloqueo de línea férrea y bloqueo de dos puentes |
| Otros | · Amenazas de volcar contenedores de mineral |

Elaboración propia a partir de la revisión documental.

Si bien en los tres casos se identifican acciones no violentas de resistencia, en dos de los tres casos hay métodos que se pueden considerar controversiales al ser susceptibles de ser interpretados como violentos (retención de personas e incendios de estructuras). Asimismo, el volumen de información documental no es suficiente para profundizar en las tácticas de resistencia utilizadas, pero sí permiten dar cuenta de la existencia de dichos conflictos y la ejecución de acciones no violentas como estrategia. Por lo cual, es necesario ampliar la investigación de estos casos y la incorporación de fuentes orales.

Demandas y alcance de las estrategias

En este apartado, se ponen en perspectiva las demandas y los alcances obtenidos, en función de las tácticas que documentalmente se han podido identificar en combinación con otros métodos como los recursos legales: en el caso del rechazo a la minería en el Cerro Achachucani, la campaña se ha enfocado especialmente en la defensa de la Represa Tacagua y dentro de los grandes logros se considera que, tras tres meses de manifestaciones en 1993, en 1994 se logró detener indefinidamente el proyecto minero que pretendía instalarse (Madrid, 2014). En el 2007 fue el turno de la canadiense Castillian Resources, debiendo nuevamente paralizarse el proyecto (Madrid, 2014).

Por otro lado, en vista a procesos iniciados que han buscado protección legal de las comunidades y la actividad agroganadera, se destacan importantes logros que reivindican el territorio como agrícola, ganadero y lechero mediante declaratorias, leyes y resoluciones administrativas³.

3 · 1994 Declaratoria de Challapata como “Capital agrícola, ganadera y comercial del Departamento de Oruro” (Resolución del consejo municipal)
 · 2003 Ley Nº 2516 del 24 de octubre de 2003. Declaratoria de las provincias de Abaroa y Cercado como “Región Industrial lechera del Occidente Boliviano”
 · 2004 Ley Nº 2632 del 5 de marzo de 2004. Declaratoria de la provincia de Abaroa como “Zona Agrícola y Ganadera del Occidente Boliviano”
 · 2006 Ley Nº 3395 del 17 de mayo de 2006. Declaración de prioridad regional de la limpieza y dragado de la Represa de Tacagua
 · 2007 Prefectura del departamento de Oruro, Resolución Administrativa Nº 205/2007: Cualquier empresa minera debe abandonar cualquier intento en Achachucani por no contar con licencia social ni ambiental.
 · 2008 Ley Nº 3974 de la Creación de la Planta Lechera, con el fin de propiciar la vocación lechera de la zona
 · 2011 Rechazo isofacto a la exploración minera de la empresa Castillian Resources (Voto resolutivo de la Asociación de Regantes de Tacagua).

En el caso de San Cristóbal, el conflicto comenzó en 1996 con la reubicación del pueblo, pero es el año 2007 cuando comienzan las denuncias por el alto consumo de agua del proyecto, a propósito de la desaparición de ojos de agua cercanos, y el 2010 se llevaron a cabo fuertes protestas (Colectivo CASA, 15 de enero de 2010; La Prensa, 19 de abril de 2010). Sin embargo, el proyecto se ha mantenido en funcionamiento y no se ha encontrado información relativa a si efectivamente se han logrado electrificar zonas aledañas o si se han tomado medidas relativas al agua, en medio de olas de desinformación que sufren las comunidades del territorio, situación similar a la ocurrida en el caso de la minería en el Salar de Uyuni, donde se han identificado formas de organización incipientes. Sin embargo, en este caso el principal objetivo se enfoca más bien en no repetir historias de devastación de los territorios y que el territorio reciba tributos y no se genere el valor agregado en el extranjero. En este sentido sí se han obtenido beneficios, ya que el gobierno derogó el decreto que autorizaba sociedad mixta de Yacimientos de Litio Boliviano y la alemana ACI Systems tras protestas (Deutsche Welle Alemania, 6 de noviembre de 2019).

En consideración de lo anterior, en los casos de rechazo a la minería en el Cerro Achachucani y en el Salar de Uyuni, se han logrado alcances acordes a las demandas que han iniciado los conflictos socioambientales, aunque solo en el primer caso es preciso calificar la campaña como exitosa. En efecto, es necesario seguir monitoreando dichos conflictos ya que en este tipo de casos, los triunfos jamás son absolutos, pues las amenazas de entrada de nuevos proyectos es latente. No obstante, cabe mencionar que en el caso de Cerro Achachucani se evidencia cómo las comunidades han utilizado una estrategia de “blindarse” ante la minería legalmente, defendiendo la tradición agroganadera y lechera de la región con perspectiva de futuro.

Conclusiones

Bolivia es un país que ha conocido el apogeo y la devastación provocada por la minería desde la invasión española. Por ello, en los discursos analizados a nivel documental se pone en valor el temor a repetir historias de imperialismo y violencia, por lo que a partir de los casos estudiados se evidencia cómo el país se constituye como un territorio de resistencia que cuestiona el extractivismo neoliberal, comprendido como el saqueo de transnacionales a los recursos de territorios del Sur Global. Existen distintos niveles de intensidad de lucha y heterogeneidad de discursos, sin embargo, se reconoce como transversal el rechazo a la minería transnacional en los tres casos, aunque esto no es sinónimo de rechazo a la minería, considerando que Bolivia se identifica con dicho rubro en al menos dos de los casos estudiados.

Quienes se involucran en las campañas de resistencia son comunidades afectadas en sus formas de subsistencia, comunidades que apoyan a comunidades vecinas, organizaciones sociales, de trabajadores y sindicales, organizaciones de mujeres, municipios y centros de inves-

· 2011 Declaratoria de la feria de Challapata como “Expoferia del altiplano Boliviano” (Resolución del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario)

· Asociación de Regantes ha logrado que el gobierno instale una Planta de Procesamiento de Lácteos, inaugurado por el presidente Evo Morales el 9 de febrero de 2011 (Colectivo CASA, 2013; Madrid, 2013; Rodríguez-Carmona, Castro y Sánchez, 2013, Madrid, 2014 y Mercado, 2021)

tigación, siendo múltiples actores en defensa de los intereses de los territorios; con el Estado, sus empresas públicas y empresas privadas en la contraparte. Del mismo modo, las acciones utilizadas son preferiblemente no violentas, aunque se han desarrollado algunas acciones controversiales que no se encuentran registradas en las clasificaciones conocidas de métodos no violentos (Sharp, 1973; Beer, 2021) como la retención de personas o destrucción de infraestructura. Asimismo, el caso correspondiente al Cerro Achachucani es el único que se puede considerar como exitoso, en el caso del Salar de Uyuni se han logrado concesiones traducidas en el desistimiento de contratos (éxito parcial) y en el caso de San Cristóbal no se ha logrado determinar el nivel de éxito o fracaso de la campaña.

En definitiva, es necesario seguir trabajando en la documentación de este tipo de casos, pues, aunque existe un mayor nivel de documentación en el caso de la minería en el Cerro Achachucani, la información circundante en los dos casos de Potosí es sustancialmente menor. Aquello remite a la oportunidad de emprender y continuar estudios en la sintonía de esta investigación y en la línea de la investigación de la resistencia civil y los métodos no violentos, no solo a nivel documental, sino que también incorporando fuentes primarias. Reconociendo, además, el desafío de mantener un seguimiento en el estudio de conflictos socioambientales en vista a las fluctuaciones en este tipo de conflictos entre periodos de aparente calma y reactivaciones como respuesta a nuevas amenazas.

Bibliografía

- ABI (16 de abril de 2010). Campesinos de Potosí toman oficinas de la mina San Cristóbal y la incendian. ABI.
- Acosta, A. y Brand, U. (2017). Salidas del laberinto capitalista. Decrecimiento y postextractivismo. Barcelona: Icaria Editorial.
- Calle, A. y Bustos, P. (2019). Minería en Bolivia: Implicancias en el comercio y producción. Banco Central de Bolivia.
- Bartkowski, M. (13 de junio de 2018). Alternative Institution-Building as Civil Resistance. Mind of the movement.
- Bebbington, A. (2009). The new extraction: Rewriting the political ecology of the Andes? NACLA Report on the Americas (Nº5), 12-20.
- Beer, M. (2021). Tácticas de resistencia civil en el siglo XXI. Washington D.C.: ICNC Press.
- Colectivo CASA (15 de enero de 2010). San Cristóbal. Colectivo CASA.
- Colectivo CASA (2013). Minería con “M” de machismo, madre tierra con “M” de mujer. Oruro: Colectivo CASA.
- Deutsche Welle Alemania (6 de noviembre de 2019). Bolivia: Tras protestas de comunidades locales, el gobierno deroga el decreto que autorizaba empresa mixta de Yacimientos de Litio Boliviano y ACI Systems. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
- Espinoza, J. (2010). Minería Boliviana: su realidad. La Paz: Plural

- Fornillo, B. (2018). La energía del litio en Argentina y Bolivia: comunidad, extractivismo y pos-desarrollo. *Colombia Internacional* (Nº 93), 179-201.
- FRUTCAS (s.f.). "Minando el agua" La mina San Cristóbal, Bolivia. FRUTCAS.
- Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de los recursos naturales. *Observatorio del Desarrollo* (Nº18), 1-18.
- Gudynas, E. (2021). Los extractivismos sudamericanos hoy. Permanencias y cambios entre el estallido social y la pandemia. En Alister, C., Cuadra, X., Julián-Véjar, D., Pantel, B. y Ponce, C. (Eds.), *Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el Sur: Capitalismo, territorios y resistencias* (pp. 25-49). Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- Herrera, J. (2005). Estimación de la demanda por agua de riego en la provincia de Avaroa, departamento de Oruro-Bolivia: Enfoque de la programación dinámica [Tesis, Universidad de Los Andes].
- Hollender, R. y Schultz, J. (2010). Bolivia y su litio ¿puede el "oro del siglo XXI" ayudar a una nación a salir de la pobreza. Cochabamba: Centro para la Democracia.
- Instituto Nacional de Estadística (2018). Bolivia: incidencia de pobreza, según departamento 2011-2018. INE.
- Instituto Boliviano de Comercio Exterior (2023). Cifras del comercio exterior boliviano 2022. IBCE.
- Iño Daza, W. (2018). Historia del extractivismo del litio en Bolivia. *RevIISE* (Nº10), 173-188.
- Jiménez, E. (2019). Entre minería, litio y quinua: los desafíos del extractivismo en el altiplano sur de Bolivia. En Seoane, A. y Claros, L. (Coords.), *Bolivia en el siglo XXI, transformaciones y desafíos* (pp.129-147). La Paz: CIDES.
- Liégeois, C. (2012). La mina San Cristóbal, Bolivia. PetroPress.
- López, E. (2009). La industria minera: una industria sedienta. En Espinoza, S. (Ed.), *Justicia ambiental y sustentabilidad hídrica* (pp. 67-90). Cochabamba: Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia.
- Madrid, E. (2014). Challapata: resistencia comunal a la desposesión hídrica de la minería a gran escala en Bolivia. En Perrault, T. (Ed.), *Minería, agua y justicia social en los Andes: Experiencias comparativas en Perú y Bolivia* (pp. 81-99). Cusco: Centro Bartolomé de las Casas.
- Madrid, E. et al. (2002). Minería y comunidades campesinas en los Andes ¿Coexistencia o conflicto?. Oruro: Investigaciones Regionales.
- Mendoza, S. (1 de agosto de 2022). Advierten escasa información del impacto ambiental del litio. *Los Tiempos*.
- Mercado, J. (2021). La consulta previa en Bolivia. Implementación y aplicación en materia minera. En Riveri, B. Quezada, C., Mercado, J. y Romero, D. (Eds.), *Entre el desarrollo y los extractivismos. El dilema de la producción en Bolivia* (pp.147-215). La Paz: Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural.
- Mondaca, G. (6 de mayo de 2022). Extracción Directa de Litio en Bolivia: No todo lo que brilla blanco es litio. CEDIB.
- La Prensa (19 de abril de 2010). Sube la tensión por toma mina San Cristóbal. No a la Mina.

- OCMAL (21 de abril de 2021). Denuncian más de 50 irregularidades en proceso de consulta minera en Challapata. OCMAL.
- OLCA, OCMAL y Resumen (12 de enero de 2021). La ambición minera por el codiciado “Triángulo del litio” en Chile, Bolivia y Argentina. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
- Organización Internacional del Trabajo (2022). Sectores de Bolivia con potencial de exportación y empleo tras la pandemia de COVID-19. Oficina de la OIT para los Países Andinos.
- Perrault, T. (2014). Agua, minería, modos de vida y justicia social en el altiplano boliviano. En Perrault, T. (Ed.), *Minería, agua y justicia social en los Andes: Experiencias comparativas en Perú y Bolivia* (pp. 102-123). Cusco: Centro Bartolomé de las Casas.
- Randle, M. (1994). *Civil resistance*. Roermond: Fontana Press.
- Restrepo, D. (2015). Neoliberales y empresarios en la emergencia de la descentralización en la Bolivia de los 90. *Revista de Historia Regional y Local* (Nº14), 320-351.
- Rodríguez-Carmona, A., Castro, M. y Sánchez, P. (2013). *Imaginarios a cielo abierto, una mirada alternativa a los conflictos mineros en Perú y Bolivia*. Madrid: ACSUR Las Segovias.
- Rodríguez, M. y Checa, D. (2022). Mapeo de procesos de resistencia civil indígenas ante proyectos extractivistas en la zona sur de los Andes (1990-2020). *Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña* (Nº1), 209-245.
- Salazar, D. y Vilches, F. (2014). La arqueología de la minería en el centro-sur andino: balance y perspectivas. *Estudios Atacameños* (Nº48), 5-21.
- Sansoni, M. (1997). La Guerra del Pacífico en la Historiografía Latinoamericana del siglo XIX y principios del siglo XXI. *Revista de la Red Intercatedras de Historia de América Latina Contemporánea*.
- Santandreu, A. y Gudynas, E. (1998). *Ciudadanía en movimiento. Participación y conflictos ambientales*. Montevideo: FESUR, CLAES y Trilce.
- Schock, K. (2013). The practice and study of civil resistance. *Journal of Peace Research* (Nº3), 77-290.
- Seoane, J. (2013). Modelo extractivo y acumulación por despojo. En Seoane, J., Taddei, E. y Algranti, C. (Eds.), *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios* (pp. 21-39). Buenos Aires: Editorial El Colectivo y GEAL.
- Serrano, C. (2004). *Historia de la minería andina boliviana (Siglos XVI-XX)*. Potosí: Fundación RAMA.
- Sharp, G. (1973). *Politics of nonviolent action, part two: the methods of nonviolent action*. Manchester: Porter Sargent Publishers.
- Stachyra, K. (10 de marzo de 2020). Las mujeres en defensa del Agua en Challapata. CEBEM.
- Ströbele-Gregor, J. (2013). El proyecto estatal de Bolivia. Expectativas, desafíos y dilemas. *Nueva Sociedad* (Nº244), 74-83.
- Svampa, M. (2012). Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. *OSAL*, (Nº32), 15-38.
- Villalobos, G. (2 de julio de 2019). ¿Cuáles serán los impactos socio ambientales de la explotación del litio en el salar de Uyuni?. Fundación Solón.